

Los gobiernos progresistas y el sindicalismo en América Latina: los casos de Chile, Argentina y Uruguay

Gonzalo Martner F.



Introducción

De haber sido organizaciones ilegales a mediados del siglo XIX, los sindicatos pasaron a constituirse en fuerzas sociopolíticas junto a los partidos políticos, contribuyendo ambos a construir instituciones centrales en las sociedades capitalistas modernas e integrándose los primeros al funcionamiento institucional de los sistemas de relaciones industriales en casi todo el siglo XX. En el occidente capitalista y en algunas de sus zonas periféricas como América Latina, ello se acentúa después de la Segunda Guerra Mundial hasta llegar, a partir de la década de los años ochenta, a una crisis bastante generalizada, iniciándose a partir de entonces un proceso de incierta reestructuración (De la Garza, 1993).

En la última etapa del siglo XX y en los inicios del siglo XXI, se ha vivido en América Latina un proceso que guarda semejanzas con el “doble movimiento” que Karl Polanyi describió al analizar la ola liberalizadora europea de fines del siglo XIX. El autor de *La gran transformación* (1944) calificó como resistencia al “desarraigo” de la economía respecto a la sociedad, el proceso que surgió como reacción a la liberalización de los mercados, en el que los primeros movimientos obreros jugaron roles relevantes. La tendencia hacia el establecimiento de mercados flexibles en medio del cambio tecnológico provocado por la revolución industrial produjo como contrapartida, en la primera parte del siglo XX, una reacción multiforme a las rupturas que la rápida expansión de los mercados generó en la vida de la población y en los equilibrios sociales preexistentes.

El proceso de ruptura del tejido social antes descrito se experimentó también, y en forma aguda, en América Latina a partir de los años setenta, dando lugar a un fenómeno de péndulo que va desde la liberalización neoliberal hacia un rechazo generalizado al modelo del *Consenso de Washington* y a la alineación automática con Estados Unidos, aunque excepcionalmente países como Colombia y México hayan mantenido gobiernos conservadores, en medio de la penetración violenta del narcotráfico en la vida social y política. El resultado político ha sido un vuelco hacia “gobiernos progresistas”, expresado por la emergencia de movimientos sociales más o menos radicales y especialmente por las decisiones de los ciudadanos en las urnas. Esto ha dado lugar a un proceso inédito en el continente latinoamericano.

Del neoliberalismo al progresismo

Desde inicios del siglo XXI, un conjunto de gobiernos ha recibido en América Latina el apelativo de progresistas. Esta es una denominación genérica que esconde realidades muy diversas de países de América del Sur y Central que han desarrollado alternativas de izquierda más o menos moderadas o radicales a la ortodoxia neoliberal que prevaleció a partir de los años setenta en Chile y luego se extendió por todo el continente. En una apreciación global, en palabras del ex comandante guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, puede sostenerse que “Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Nicaragua y Honduras son países en los que las izquierdas están gobernando o ya gobernaron. En México, Costa Rica, Perú y Colombia hay varias izquierdas, si asumimos al PRI, a Liberación, al Partido Liberal y al APRA como tales. Podemos concluir que la totalidad del continente es o ha sido gobernado por la izquierda. Muchos ex guerrilleros y luchadores sociales son ahora alcaldes, diputados, magistrados, jefes de policía, ministros de gobierno y presidentes en los distintos países. La democracia convirtió a la izquierda en la fuerza más organizada, con mayor soporte y con más poder del continente”.

Cabe hacer, sin embargo, algunas distinciones, pues las configuraciones institucionales y las orientaciones en las nuevas estrategias de desarrollo de la etapa post neoliberal difieren bastante según los países. Se puede sostener que existen dos variantes principales en la izquierda latinoamericana contemporánea². En primer lugar, cabe identificar a los **gobiernos progresistas del Cono Sur** -el Chile de los socialistas moderados Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en coalición con los cristiano-demócratas desde 2000, en continuidad con los gobiernos democráticos desde 1990; el Brasil del Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva desde 2003 y su sucesora Dilma Rousseff; el Uruguay del Frente Amplio de Tabaré Vázquez desde 2005 y su sucesor José Mujica- los que pertenecen a corrientes políticas de izquierda o centro izquierda más o menos comparables con la vertiente socialdemócrata, en todo caso emanadas de las complejas realidades latinoamericanas y de sus procesos recientes de consolidación democrática. Una orientación relativamente semejante, pero en diversos aspectos más radical, ha mantenido la

¹ Ver Villalobos (2010)

² La Cuba de los hermanos Castro corresponde a un origen histórico particular y no es asimilable a las experiencias latinoamericanas recientes, por lo que no se considera en este análisis.

Argentina de los peronistas Nestor Kirchner y Cristina Fernández, que luego de la grave crisis económica y política de 2001 lograron una progresiva recuperación económica en base al repudio del 70% de la deuda externa argentina y a la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, manteniendo un sello no siempre clasificable según las categorías más tradicionales de análisis político. También se puede afirmar que en el Perú Alan García mantiene una inspiración socialdemócrata, pero su segundo gobierno, iniciado en 2006, ha evidenciado rasgos de continuidad conservadora, luego de un primer gobierno poco exitoso pero de inspiración reformadora en 1985-1990. Se puede incluir en los gobiernos progresistas del Cono Sur al Paraguay del ex obispo Fernando Lugo, aunque éste sólo gobierna desde 2008 y con una configuración política inestable.

En segundo lugar, cabe mencionar a los **gobiernos de sello refundacional** que han emergido preferentemente en el espacio andino (en la Venezuela de Hugo Chávez desde 1999, la Bolivia de Evo Morales desde 2006 y el Ecuador de Rafael Correa desde 2006), que han llegado al poder luego de crisis políticas y del colapso de sus sistemas tradicionales de partidos políticos. Han construido democracias con sesgo plebiscitario en base a liderazgos presidenciales fuertes y reelecciones periódicas. En el espacio centroamericano, guardando las importantes diferencias en las estructuras políticas y económico-sociales, se puede agregar al primer grupo a la Guatemala de Álvaro Colom y El Salvador de Mauricio Funes y al segundo grupo a la Nicaragua de Daniel Ortega y la Honduras de Manuel Zelaya (hasta que fuera derrocado en 2009).

Países de América Latina y el Caribe según PIB por habitante, 2010

País	PIB por habitante 2010 (dólares a paridad de poder de compra)	Población (millones)
Argentina	15.030	40,5
Chile	14.940	17,2
México	14.151	108,6
Uruguay	13.961	3,4
Panamá	12.242	3,5
Venezuela	11.727	29,2
Brasil	11.066	193,3
Costa Rica	10.687	4,8
R. Dominicana	9.139	9,2
Perú	9.108	29,6
Colombia	9.092	45,5
Ecuador	8.022	14,3
Belice	7.621	0,3
El Salvador	7.443	5,9
Guyana	7.005	0,8
Guatemala	4.875	14,4
Paraguay	4.711	6,4
Bolivia	4.576	10,4
Honduras	4.175	8,0
Nicaragua	2.636	6,5
Haití	1.212	9,1

Fuente: IMF, World Economic Outlook Database, April 2010.

Los gobiernos progresistas del Cono Sur se han desempeñado con razonable éxito y han sido revalidados en elecciones democráticas recientes en Uruguay (noviembre 2009) y Brasil (octubre 2010), mientras se presentan favorables perspectivas de reelección para Cristina Fernández en los comicios previstos para octubre de 2011³. La excepción ha sido Chile: luego de veinte años de gobierno y de ganar cuatro elecciones presidenciales, la coalición de fuerzas de centro y de izquierda democrática denominada Concertación de Partidos por la Democracia fue puesta en minoría en las urnas en enero de 2010 por una personalidad empresarial de centro-derecha.

Los gobiernos progresistas del Cono Sur, cuyo sello ha sido el de estabilizar la democracia y las libertades, recuperar y /o ampliar los niveles de presión fiscal previos a la ola neoliberal, fortalecer sus sistemas de protección social y equilibrar sus relaciones laborales manteniendo economías dinámicas de mercado con mayores o menores grados de regulación pública, han llevado a cabo sus políticas en algunos de los países de mayor desarrollo relativo en el contexto latinoamericano y con menor prevalencia de la economía informal. Su crecimiento en la primera década del siglo XXI ha sido además significativo.

El sindicalismo en la región latinoamericana

Las estructuras sindicales en el Cono Sur cuentan con una importante tradición, la que ha debido redefinirse luego de la ola neoliberal y más tarde con gobiernos progresistas que han revalorizado el diálogo social y el rol del sindicalismo, pero en nuevas condiciones. Recordemos que ha predominado tradicionalmente en estos países un modelo de relaciones de trabajo reglamentarista. Se registran huelgas legales debidamente regladas en el marco de los procesos de negociación colectiva pero también muchas ilegales, a la par que se ratifica la mayoría de los convenios internacionales, aunque su grado de cumplimiento

³. Cabe precisar que esta tendencia a la continuidad también se ha constatado en las elecciones presidenciales que han tenido lugar en Bolivia (diciembre 2009) y Colombia (mayo 2010), cuyos gobiernos de refundación indigenista en un caso y de orientación conservadora en el otro, y por tanto muy diferentes en su signo político, también han visto renovada la confianza de los ciudadanos en su gestión.

suele ser bajo. La lógica reglamentaria no incluye necesariamente una efectiva protección del desarrollo de la actividad sindical. A pesar de que la lógica neoliberal privilegió reformas tendientes a atomizar la estructura sindical a nivel de empresa e incluso de áreas de la empresa, con baja cobertura y atomización de conjunto, en Argentina, Brasil y Uruguay predominan los sindicatos por ramas.

En las décadas de los setenta y ochenta y en gran parte de América Latina, el sindicalismo atravesó por un período poco proclive para su desarrollo. Primero con dictaduras (especialmente en Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay y la mayor parte de América Central) que lo reprimieron sin contemplaciones y más tarde una vez recuperada la democracia, con reformas neoliberales inspiradas en el llamado Consenso de Washington. Estas incluyeron desregulaciones de los mercados laborales que pusieron en cuestión la estructura tradicional de desarrollo del sindicalismo. Muchas reformas del Estado se habían transformado en necesarias frente a entidades públicas y regulaciones hipertrofiadas que originaban rentas y ventajas de tipo corporativo sectorial, pero el error de largo plazo de las reformas privatizadoras fue el

no fortalecer las áreas de la institucionalidad pública indispensables para el buen funcionamiento de los mercados y la mantención de grados básicos de cohesión social, especialmente en el campo de la protección social, la salud y la educación, además de la expansión de las infraestructuras, factores cruciales para el desarrollo en el mediano y largo plazo.

Zapata (2001) ha reseñado los elementos cuya transformación modificó las posibilidades del sindicalismo latinoamericano de mantener sus prácticas históricas: la mayor movilidad del capital, la apertura comercial, la privatización de empresas estatales, la desregulación laboral, el crecimiento del sector informal, la reducción del empleo público, el menor tamaño de las empresas, la relocalización económica, la expansión de la subcontratación y la feminización de la fuerza de trabajo, junto a un debilitamiento de los lazos corporativos entre sindicatos y Estados. Los sindicatos reemergieron en la escena política democrática latinoamericana bajo la paradoja de

Las estructuras sindicales en el cono sur cuentan con una importante tradición, la que ha debido redefinirse luego de la ola neoliberal y más tarde con gobiernos progresistas que han revalorizado el diálogo social y el rol del sindicalismo, pero en nuevas condiciones.

haber sido importantes fuerzas de oposición a los regímenes autoritarios, lo que les proveyó de una legitimidad renovada, pero al mismo tiempo el proceso de democratización se vio confrontado a retrocesos difíciles de revertir en el corto plazo en materia de derechos de los trabajadores, pobreza y desigualdad, especialmente cuando diversos países enfrentaron problemas de estabilización macroeconómica y que llegaron en algunos casos hasta la hiperinflación, como en Argentina. Estos fenómenos condujeron de manera generalizada a nuevas “reformas estructurales” promovidas por los organismos multilaterales de crédito, las que incluyeron reformas del Estado y diversas privatizaciones y desregulaciones. Las reacciones sociales a este tipo de políticas y la lógica reactiva al diálogo social de sus impulsores gubernamentales fueron disminuyendo el campo de interlocución del movimiento sindical y en muchos casos minando su potencial de representación.

El caso de Chile

El movimiento sindical reemergió a la democracia con una fuerte legitimidad social derivada de su rol en las movilizaciones sociales de la década de los años 1980 contra el régimen militar, especialmente los trabajadores del cobre, pero con una disminuida tasa de sindicalización y una presencia mermada en los procesos de negociación colectiva, reducidos al nivel de la empresa, con escasas excepciones. La llegada al gobierno de una coalición de cristianodemócratas y socialistas, muy cercana a la reconstituida Central Unitaria de Trabajadores, dirigida hasta 1997 por el cristianodemócrata Manuel Bustos y desde entonces por el socialista Arturo Martínez, implicó que el sindicalismo retomara un rol en el diálogo social y en especial en la discusión periódica con el gobierno sobre el salario mínimo nacional y las asignaciones familiares y sobre la negociación salarial del sector público.

En una primera etapa los dirigentes empresariales se mantuvieron en los espacios de diálogo social, pero luego fueron relativizando su participación. Por su parte, después de negociaciones salariales globales relativamente exitosas en los primeros años de democracia, el impacto negativo en la economía chilena de la crisis asiática en 1999, que produjo la primera recesión desde 1983, el sindicalismo tendió a endurecer sus posturas y dejó de llegar a acuerdos con los gobiernos de signo progresista de Lagos y Bachelet

en materia de salario mínimo y reajuste salarial del sector público, los dos espacios privilegiados del diálogo social. Los gremios del sector público aumentaron sus críticas a la gestión del gobierno, incluyendo los sindicatos de profesores, del personal de salud y de la administración central, y mantuvieron posturas críticas y movilizaciones sectoriales relativamente frecuentes, aunque la dinámica negociadora tendió a mantenerse en las empresas públicas del cobre, del petróleo y del sector bancario, mientras el sindicalismo del sector privado sufrió las consecuencias estructurales del debilitamiento de la negociación colectiva heredada del régimen militar de 1973-1989, con excepción de algunos sectores de servicios y de la gran minería privada.

Las reacciones sociales a este tipo de políticas y la lógica reactiva al diálogo social de sus impulsores gubernamentales fueron disminuyendo el campo de interlocución del movimiento sindical y en muchos casos minando su potencial de representación.

Tampoco contribuyó al fortalecimiento del sindicalismo del sector privado la emergencia de un desempleo más alto en la primera década del siglo XXI que aquel prevaleciente en la segunda parte de los años noventa. La Central Unitaria de Trabajadores sufrió además escisiones y una cierta pérdida de legitimidad a raíz de menores incrementos del salario mínimo y del salario real promedio que el crecimiento de la economía, dada la política de mayor contención salarial practicada en la última década.

La decisión de no volver a proponer reformas a la negociación colectiva de parte del gobierno de Michelle Bachelet, sucesivamente rechazadas por los conservadores en el parlamento en los gobiernos anteriores, y en circunstancias que sólo un 12% de la fuerza de trabajo está organizada sindicalmente y apenas un 5% de la misma realiza negociaciones colectivas, provocó un cierto incremento del malestar sindical con el gobierno. Sin embargo, los sindicatos apoyaron la candidatura presidencial de continuidad representada por el ex presidente Eduardo Frei, que resultó derrotada en 2010, en tanto que el presidente de la principal central sindical fue, sin éxito, candidato a diputado. El nuevo gobierno conservador ha sido hasta ahora cauto en su relación con los sindicatos, aunque lleva adelante una reforma que flexibiliza la relación laboral de los maestros y prepara una reforma del sistema de indemnizaciones a la que se opone el sindicalismo organizado.

El caso de Argentina

El retorno del peronismo al poder supuso su reconversión, bajo el Presidente Menem (1989-1999), hacia una política marcadamente neoliberal, pero con grados de acuerdo con el sindicalismo peronista tradicional, cuya postura fue menos beligerante que con el gobierno radical de Raúl Alfonsín, el primero después de recuperar la democracia en 1983. La reforma de 1998 canceló reformas anteriores y aumentó la centralización de la negociación colectiva para beneficiar a los sindicalistas tradicionales agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT), aunque fuera de la CGT ha existido otra central sindical significativa, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que aspira a romper el monopolio de

Desde 2007 Hugo Moyano y la presidenta Cristina Fernández mantienen una alianza política. Su gobierno profundizó la política de generalización de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales que había iniciado Néstor Kirchner.

la representación gremial. La CTA, que organiza principalmente a un sector de los empleados públicos y maestros, tiene una menor inserción entre los trabajadores industriales y de las actividades terciarias privadas y ha compensado estas debilidades convocando a diversas organizaciones representativas de la pequeña y mediana empresa, asociaciones de profesionales e intelectuales y otras formas de estructuración

político-social.

Para el historiador argentino Julio Godio, citado por Núñez (2010), “el sindicalismo perdió el rumbo en la época de Menem. Lo venía perdiendo ya en la época de Alfonsín. Con Alfonsín le fue fácil porque sustituyó al justicialismo y le hizo 13 paros”. Cabe recordar que el sindicalismo argentino tiene el control sobre las llamadas “obras sociales”, financiadas por las cotizaciones de los afiliados a los sindicatos y por subvenciones públicas y aportes que se recaudan de las remuneraciones de los más de seis millones de cotizantes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Las obras sociales sindicales tienen un presupuesto que representa tres veces el del Ministerio de Salud.

El actual líder sindical, Hugo Moyano, ha incrementado su peso político en el Partido Justicialista, en el que el sindicalismo ha sido desde su creación por Juan Domingo Perón un factor determinante. Asumió la

conducción del gremio de los camioneros en 1992, cuando este sindicato tenía 70.000 afiliados. El éxito de su liderazgo se refleja en que en 2010 superó los 200.000 miembros. Su ascenso ha estado unido a la expansión de la producción de soja y al boom agropecuario. Con la llegada de la Alianza entre radicales y la centroizquierda del FREPASO al poder en 1999, Hugo Moyano rompió con la CGT, cuando la central apoyó la reforma sindical del presidente Fernando de la Rúa. La CGT quedó partida en dos conducciones paralelas. Pese a que el líder camionero apoyó a Adolfo Rodríguez Saá en las elecciones de 2003, acabó aliándose con Néstor Kirchner en su período presidencial de 2003 a 2007 y con el Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. En 2004, finalmente conquistó el poder en la compleja geografía sindical agrupada en la CGT.

Desde 2007 Hugo Moyano y la presidenta Cristina Fernández mantienen una alianza política. Su gobierno profundizó la política de generalización de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales que había iniciado Néstor Kirchner. Más del 90% de los convenios colectivos se realizan por rama y sub-rama de actividad económica y los restantes por empresa. Las cláusulas más habituales son las salariales, pero se ha registrado un aumento de la cantidad de cláusulas sobre regulación de las relaciones laborales en la empresa y las condiciones de trabajo, incluyéndose entre ellas la creación de comités de higiene y seguridad y cláusulas especiales de no discriminación.

El crecimiento de la presencia sindical en el sistema de relaciones laborales ha impulsado incluso modificaciones en los planes de estudios de algunas universidades, con el fin de incluir mayor información y análisis sobre los sistemas, reglas y técnicas de diálogo social en la gestión de los recursos humanos de las empresas.

Al asumir Néstor Kirchner la presidencia del Partido Justicialista en 2008, Hugo Moyano obtuvo la vicepresidencia segunda del partido oficial. Luego en 2010 el dirigente de la CGT asumió la conducción del PJ bonaerense. Como afirma Claudio A. Jacquelin, citado también por Núñez (2010): “el líder camionero, a diferencia de cualquiera de sus predecesores, tiene ambiciones político-electtorales, cuenta con un poder gremial que no hay quien se anime a disputarle con perspectivas de éxito y que es capaz de parar el país sin depender de nadie. Además, ha desarrollado un entramado de negocios que le da autonomía económica y poder de fuego propio, por el cual le temen desde empresarios hasta funcionarios públicos,

tanto nacionales como municipales”. El fallecimiento de Néstor Kirchner en octubre de 2010, uno de cuyos últimos interlocutores telefónicos para tratar temas del peronismo bonaerense fue precisamente el jefe de la CGT, se ha traducido en un compás de espera y en una renovación de lealtad hacia la presidenta Fernández, la que está en condiciones de asumir una estrategia de reelección que seguirá contando con los factores tradicionales de poder del peronismo como son los gobernadores de provincia y los dirigentes sindicales. El electorado peronista y de clases medias se ha ido re-encantando con la jefa de Estado, cuya popularidad se resintió en 2008 con el fuerte conflicto con el empresariado rural (llamado el “paro del campo”) a raíz de su propuesta de incrementar la tributación según los niveles de precios frente al boom de la soja para incrementar los gastos sociales, especialmente frente a la división de la oposición y la ausencia de alternativas claras. La economía se mantiene con un razonable desempeño positivo y se consolidó una buena percepción de medidas como la universalización de la asignación familiar por hijo en 2009 y la re-estatización de las jubilaciones y pensiones en 2008 para poner fin al sistema de AFJP, un régimen privado de pensiones y jubilaciones que había constituido una de las principales medidas de la política generalizada de privatizaciones llevada adelante por el gobierno de Carlos Menem.

El caso de Uruguay

La victoria de la izquierda uruguaya con Tabaré Vázquez en 2005 tuvo la característica de culminar un largo recorrido político (iniciado en 1971 y retomado con nuevos bríos con la recuperación de la democracia en 1985) de una coalición con mecanismos legitimados y estables de determinación de sus liderazgos y de su orientación programática, a pesar de una diversidad de componentes que va desde comunistas a cristianodemócratas y de moderados a radicales. Un líder de gobierno indiscutido, una mayoría parlamentaria sólida y disciplinada y vínculos orgánicos con un sindicalismo representativo han hecho de la experiencia del Frente Amplio uruguayo una de las de mayor coherencia entre las del progresismo latinoamericano actual. Esto incluye tanto una lógica de preservación del interés general frente a determinadas coyunturas de desencuentro con reivindicaciones corporativas –como las que se manifestaron durante la larga gestión previa del Frente Amplio en la intendencia

de Montevideo con el sindicato municipal- y al mismo tiempo la aprobación tanto de un sistema de impuesto a la renta hasta entonces inexistente como de una “plan de emergencia social” y luego un “plan de equidad”, junto a un fortalecimiento legislativo de la negociación colectiva por ramas en el parlamento y un crecimiento económico que ha rondado el 8% anual hasta 2008.

Tal vez las expectativas positivas que dejó el gobierno de Tabaré Vázquez, luego de superar la difícil coyuntura económica que siguió a las devaluaciones brasileña y argentina hace una década y la crisis bancaria de 2002, generaron demandas que devinieron en conflictos sindicales importantes, a meses de asumir el nuevo gobierno el ex guerrillero tupamaro, José Mujica como presidente y el izquierdista moderado, Danilo Astori como vicepresidente en marzo de 2010. También ha jugado un papel el que Mujica se haya alejado de posturas maximalistas: “Hay que tener capital (...) y si no lo tenés, hacé alianza con quien lo tiene y no vas a perder la conciencia ni la vergüenza”. Mujica incluso ha criticado con humor las nacionalizaciones que realiza Hugo Chávez: “tiene mucha voluntad, pero Venezuela tiene demasiados recursos, mucho petróleo, mucho dinero... el resultado es una burocracia tan grande que ‘mamma mia’!!!...se trata de una receta perfecta para desarrollar una burocracia opresora” y afirmado: “como estamos bastante bien (desde el punto de vista económico), parece que (el gobierno) da poco. Yo acepto esa contradicción”.

El electorado peronista y de clases medias se ha ido re-encantando con la jefa de Estado, cuya popularidad se resintió en 2008 con el fuerte conflicto con el empresariado rural (llamado el “paro del campo”) a raíz de su propuesta de incrementar la tributación según los niveles de precios frente al boom de la soja para incrementar los gastos sociales.

Uno de los proyectos estrella de su gobierno es el de la reforma del Estado para que la administración gane en eficiencia, lo cual no ha gustado a sectores gremiales del sector público: “quiero que los concursos sean transparentes para que no me vendan gato por libre...Es la idea central y nos pusimos la pistola en la cabeza. Vamos a intentar hacer lo que los ingleses hicieron en 1854. Estamos un poco atrasados, pero lo vamos a intentar”. En julio de 2010, la administración de Mujica anunció una reforma del Estado que implicaría, entre otras cosas, terminar con la inamovilidad de los funcionarios públicos, reformar la carrera administrativa y establecer un nuevo sistema de remuneraciones. Además, se pretende simplificar las contrataciones y regular a los funcionarios de carácter político y de confianza.

La reforma es considerada una prioridad por Mujica, que ha reiterado que los trabajadores públicos deben trabajar para el país y les ha reclamado más eficiencia. Estas posturas le han provocado tensiones con su propia coalición, sobre todo con sectores como el Partido Comunista. No se trata de vender empresas públicas pero sí de habilitar el ingreso de inversores privados en obras públicas de gran magnitud y en áreas que estaban restringidas al Estado. En el segundo gobierno de izquierda de la historia política uruguaya se prepara un ambicioso plan para que los privados se asocien al Estado en la construcción de obras públicas de rutas, escuelas, cárceles, plantas de energía, terminales portuarias y otras de infraestructura, lo que ya ocurrió en el caso chileno.

En este contexto de definición de sus prioridades de política económica, el presidente uruguayo afrontó el

La reforma es considerada una prioridad por Mujica, que ha reiterado que los trabajadores públicos deben trabajar para el país y les ha reclamado más eficiencia. Estas posturas le han provocado tensiones con su propia coalición, sobre todo con sectores como el Partido Comunista.

7 de octubre de 2010 su primera huelga general de 24 horas, convocada por la principal central obrera del país que le reclama más presupuesto para educación, salud y vivienda y mejores salarios. El ministro del Trabajo señaló que “en momentos que se analiza el presupuesto de gastos del Estado para los próximos cinco años es “bastante natural” que haya “reclamos y movilizaciones sindicales”.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) fue la principal impulsora de la huelga general de un día, que en principio tuvo la resistencia de otros sindicatos en la discusión interna de la central PIT-CNT que agrupa a los sindicatos.

Los conflictos sindicales se han desarrollado en el sector bancario público, con los controladores aéreos, los funcionarios de la Intendencia de Montevideo -donde reside la mitad de los 3,4 millones de habitantes de Uruguay- los funcionarios públicos agrupados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Públicos (COFE) y los funcionarios judiciales. La ola de protestas coincidió con el análisis en el parlamento del presupuesto de gastos del Gobierno para el período 2010-2015 y la instalación de consejos de salarios donde las entidades gremiales y las empresas

negocian con mediación oficial. Pese a las tensiones mencionadas, la base de apoyo parlamentaria y en la opinión pública permitirá al presidente Mujica llevar adelante las reformas comprometidas, en un contexto en que prevalecerá probablemente el diálogo social con un sindicalismo fuerte, que es una de las características del Uruguay contemporáneo. La disminución de la pobreza y niveles de desigualdad muy inferiores a los que mantienen Brasil, Chile o Colombia (el coeficiente de GINI es el más bajo de Sudamérica), no se ha obtenido en detrimento del dinamismo económico, pues Uruguay ha alcanzado un fuerte ritmo de crecimiento en el último quinquenio, con un mejor desempeño en la crisis de 2009 que sus vecinos y el resto de América Latina: este desempeño pone a este país, junto con Chile, en la lista corta de las naciones en transición que vislumbra alcanzar en la próxima década niveles de ingreso por habitante comparables a los de Europa del Sur.

Consideraciones finales

La capacidad de control por el sindicalismo de aspectos del funcionamiento del mercado de trabajo y de los procesos de producción y de acceso a los partidos políticos y a la influencia sobre el gobierno y sus políticas públicas experimentó una declinación en las últimas décadas del siglo XX, sin perjuicio de mantener capacidades de movilización sectorial y de apoyar expresiones variadas de descontento social, junto con ganar en diversos casos más autonomía, diversificación de sus modalidades organizativas y nuevas alianzas con organizaciones populares urbanas y en algunos casos rurales más allá del sector formal, aunque de manera discontinua. A pesar de la disminución de su peso, en la primera década del siglo XXI en el sector público se mantuvo un mayor grado de sindicalización y en el sector social (salud y educación) incluso aumentó su militancia en comparación con otros sectores de actividad, lo que se explica probablemente por una mayor visibilidad y capacidad de interlocución política y una menor exposición a la competencia de mercado interna y externa. En ese contexto, el sindicalismo, ha experimentado dificultades para cambiar con la velocidad que demandan los nuevos desafíos de representación de las clases populares y nuevas realidades como la organización social territorial en grupos de protesta no permanente, que suelen buscar lazos clientelistas para procurar su supervivencia. Tampoco la dirigencia sindical ha avanzado sustancialmente en la inclusión de las mujeres y los jóvenes en sus organizaciones para poder dar cuenta de su creciente relevancia en la fuerza de trabajo.

La redefinición de relaciones políticas y de inserción en las relaciones laborales que puedan influir en el proceso de toma de decisiones, distinta de la que históricamente se desarrolló bajo la lógica del corporativismo sindical tradicional del siglo XX y tras el debilitamiento que produjo el período de dictaduras y luego la ola neoliberal, es el desafío del sindicalismo latinoamericano actual. Con la nueva realidad que emergió con los gobiernos progresistas, los sindicatos ganaron en capacidad de anudar alianzas políticas más estables en base a los vínculos de largo plazo con las

nuevas fuerzas gobernantes. Pero al mismo tiempo han vivido paradójicamente la presión de ajustarse a la lógica de poder de sus aliados en el gobierno y sus necesidades de conformación de coaliciones amplias en el dominio parlamentario y económico-social, especialmente con segmentos del empresariado a los que los gobernantes invitan a ser parte de los esfuerzos de inversión en la economía en general y en la infraestructura pública en particular para procurar acelerar el crecimiento y permitir espacios mayores a las políticas sociales.

REFERENCIAS

- De la Garza, Enrique. (1993): *Reestructuración Productiva y Respuesta Sindical en México*. México: IIEc-UNAM.
- Ermida Uriarte, Oscar (2007): *La política laboral de los gobiernos progresistas*. Montevideo: Fundación Friedrich Ebert.
- Martner, Gonzalo (2009): “Políticas Sociales y Gobiernos Progresistas”, in *Diálogo Movimiento Sindical - Gobiernos Progresistas: Un Primer Balance de las Políticas Progresistas en la Región*, Montevideo: Fundación Friedrich Ebert.
- Núñez, Rogelio (2010): “Argentina: un poder fáctico llamado Hugo Moyano”, in Infolatam. Disponible en: <http://www.infolatam.com/2010/10/07/argentina-hugo-moyano-kirchner-peronismo-justicialismo/>.
- Polanyi, Karl (2003): *La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*. México: Fondo de Cultura Económica.,
- Villalobos, Joaquín (2010): “El futuro de las izquierdas”, in Infolatam. Disponible en: <http://www.infolatam.com/2010/10/18/joaquin-villalobos-izquierda-america-latina-farc-chavez-cuba-democracia/>.
- Wachendorfer, Achim (2007): *¿Hacia una nueva arquitectura sindical en América Latina?* Montevideo: Fundación Friedrich Ebert.
- Zapata, Francisco (2001): “¿Crisis del sindicalismo en América Latina?”, in: Cuadernos del CENDE, 41.

ANÁLISIS Y PROPUESTAS - Diálogo Partidario

Los gobiernos progresistas y el sindicalismo en América Latina: los casos de Chile, Argentina y Uruguay

Gonzalo Martner*

*Director del Centro de Políticas para el Desarrollo de la Universidad de Santiago de Chile.

El contenido presentado en “Análisis y Propuestas” representa el punto de vista del autor y no necesariamente refleja la opinión de la Fundación Friedrich Ebert.

Esta publicación está disponible en internet: www.fes.cl, en Publicaciones

ANÁLISIS Y PROPUESTAS

Mayo de 2011



La Friedrich Ebert Stiftung es una fundación política alemana. Se dedica a la labor de la asesoría y la capacitación política y ofrece espacios de debate en Alemania y en diversos países en todo el mundo. El objetivo de su labor es fortalecer la democracia y la justicia social. Para estos efectos, coopera con actores políticos y sociales de la más diversa índole en Alemania y en el mundo.

www.fes.cl / feschile@fes.cl